

Las fronteras del gobierno de Kirchner¹

Maristella Svampa

La caracterización del gobierno de N. Kirchner no es una tarea sencilla, pues requiere tomar nota de los elementos de ruptura, que se refieren a la significación positiva de ciertos gestos políticos y a los nuevos aires ideológicos que surcan el continente, así como de los elementos de continuidad que dicho gobierno ofrece en términos de modelo de dominación y de políticas redistributivas. En este sentido, aunque el gobierno de Kirchner está lejos de constituir una supuesta refundación política, como sostienen fervorosamente sus defensores, tampoco puede ser interpretado sin más en términos de continuidad lineal respecto de los años '90, como afirman ciertos críticos del mismo.

Y si no, ¿cómo podríamos analizar y comprender la inclusión en el elenco gubernamental de dirigentes y militantes sociales, fuertemente comprometidos en la lucha contra el modelo neoliberal durante los '90, mientras observamos que se perpetúan en cargos importantes tantos representantes de la dirigencia política vinculada a la época menemista? ¿Cómo podemos entender que algunos reivindiquen una "nueva política" en oposición a la "vieja política", frente a la potenciación de los dispositivos clientelares que el kirchnerismo ha realizado con relación al empobrecido mundo popular? ¿Cómo podríamos explicar que Kirchner haya asumido como política de Estado la condena a la violación de los derechos humanos realizados bajo la última dictadura militar, haciendo avances inimaginables en este campo y, al mismo tiempo, haya sido el gobierno que con mayor énfasis –y éxito– promovió la criminalización de las organizaciones de desocupados opositoras, símbolo de la resistencia al modelo neoliberal?

En el presente artículo proponemos hacer un análisis de algunas de las dimensiones del gobierno de Kirchner, con el fin de evaluar rupturas y continuidades del proceso en curso. Una serie de preguntas guían nuestra presentación: ¿ha habido cambios en la política social respecto del amplio mundo de los excluidos? ¿Cuál es la política laboral del gobierno, en especial en relación con el multiplicado mundo de los trabajadores

¹ Publicado en Revista *Crisis*, número 0, diciembre de 2006, www.revistacrisis.com.ar

precarios? ¿Cuáles las orientaciones centrales respecto de las empresas privatizadas, de los recursos naturales y el medio-ambiente? En fin, tampoco podían estar ausentes los interrogantes acerca de las fronteras de la política, frente a las divisiones entre política institucional y no institucional.

Del declive de las movilizaciones a la demanda de normalidad

Hay diversos factores que ayudan a comprender los primeros “éxitos” del gobierno de N. Kirchner. En primer lugar, recordemos que la gran crisis de 2001 estuvo recorrida por demandas ambivalentes y hasta contradictorias. Si, por un lado, había un llamado a la solidaridad y a la auto-organización social, lo cual desembocó en la conformación de un campo multiorganizacional; por el otro, la crisis expresaba también un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad, frente a la amenaza de disolución social. Durante el año 2002 tendió a imponerse la demanda de solidaridad, en un escenario de efervescencia social y de surgimiento de nuevas formas de acción colectiva, críticas de la política neoliberal. Sin embargo, a principios de 2003, el declive de las nuevas movilizaciones así como la fragmentación en el campo de las organizaciones de desocupados, fueron diluyendo la expectativa de una recomposición política “desde abajo”, para dar paso a la demanda de orden y normalidad. En este sentido, desde el comienzo, Kirchner buscaría encarnar esta exigencia creciente de normalidad, como aparece ilustrado en su consigna “Por un país en serio, por un país normal”.

Al mismo tiempo, el gobierno de Kirchner se instaló rápidamente en un espacio de crítica al neoliberalismo, que había sido la nota común de las grandes movilizaciones de 2002. En efecto, su llegada se vio favorecida por la emergencia de un nuevo polo latinoamericano, visible en el surgimiento de gobiernos de “centro-izquierda”, como el de Lula en Brasil y Chávez en Venezuela, en un contexto de crisis del consenso neoliberal, propio de los ‘90. Este cambio de clima ideológico, se expresaría en la retórica antineoliberal que Kirchner asumiría desde mediados del año 2003 y que tendrían como blanco favorito ciertos agentes económicos nacionales o las empresas privatizadas en manos de consorcios multinacionales.

Por otro lado, los primeros gestos políticos de Kirchner mostraron una vez más la productividad política del peronismo, generando una amplia expectativa social y recolocando el sistema institucional en el primer plano. Entre estas medidas se destacan el descabezamiento de la cúpula militar y el recambio de la Corte Suprema de Justicia, asociada a la "mayoría automática" de los '90. Asimismo, Kirchner asumió como política de Estado la condena de la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar (1976-1983), así como a impulsar una política de la memoria; dos cuestiones estrechamente ligadas a la larga lucha desarrollada por las organizaciones de derechos humanos en Argentina.

Por último, los factores arriba mencionados tendrían hoy un peso menor si no se añadiera la variable referida el alto crecimiento de la economía argentina en los últimos tres años. En efecto, el gobierno de Kirchner exhibe logros económicos importantes respecto de la gran crisis de 2002, visible en la generación de empleo y el descenso paulatino de la tasa de desocupación, que hoy ronda el 11,4%.² Más aún, el superávit fiscal, en 2005 permitió al gobierno argentino cancelar la deuda que tenía con el FMI, (9500 millones de dólares), que pese a constituir solo un 9% de la deuda externa, tuvo una repercusión muy positiva en la sociedad. Dicho crecimiento se explica tanto por el pasaje a un modelo productivo orientado a la sustitución, que condujo a la revitalización de un sector de la industria nacional, como por la rentabilidad de las exportaciones (maíz, soja transgénico), beneficiadas por la devaluación y los altos precios internacionales.

Sin embargo, a pesar del descenso paulatino de la desocupación, que hoy ronda el 11,4%, las brechas económicas y sociales abiertas en los '90, y reforzadas luego de la salida desordenada de la convertibilidad, se han consolidado. Así, si en la década anterior, el 10% más rico ganaba 20 veces más que el 10% más pobre, en la actualidad, la brecha es un 35% más amplia, (supera 27 veces)³. Por ende, el balance económico-social está lejos

² La tasa, correspondiente al primer trimestre de 2006, no incluye a los beneficiarios de los planes sociales. En ese caso, la desocupación alcanzaría el 14,1. (Taller de Estudios Laborales, www.tel.org.ar)

³ C.Lozano, "Comportamiento de los sectores dominantes. Pobreza, distribución del ingreso y crecimiento en Argentina", ponencia presentada en el encuentro "Plan Fénix, en víspera del segundo centenario", Buenos Aires, septiembre de 2005.

de ser uniforme, dejando al descubierto la falta de vinculación entre estrategias de crecimiento y políticas de redistribución.

Las fronteras de la inclusión: sobre excluidos y precarios

Recordemos que, en medio de la gran crisis, durante el gobierno provisorio de Duhalde (2002-2003) los subsidios a desempleados aumentaron de 300 mil o 700 mil (según los gobiernos) a casi 2 millones, a partir de la instalación del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Esta política de masificación de la ayuda social se continuó con Kirchner, quien retomó la iniciativa de “recuperar” el espacio perdido en manos de las nuevas organizaciones de tipo territorial. Así, los nuevos planes conllevaron un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal y ello, por varias razones. En primer lugar, debido a su carácter no universalista, su implementación generó rápidas sospechas de discrecionalidad y manejo clientelar. Asimismo, el gobierno se negó a aumentar el monto de los planes (50 U\$A por mes), cuyo efecto compensatorio fuera licuado por la inflación post-devaluación, ni tampoco promovió el debate en torno a otro tipo de políticas públicas (por ejemplo, modelos de ingreso ciudadano). Por último, a diferencia de los anteriores, los planes Jefas y Jefes de Hogar condujeron a una individualización de la contraprestación laboral, lo cual repercutió negativamente sobre el universo de los beneficiarios, contribuyendo al debilitamiento de la “cultura del trabajo”.

El segundo eje de la política social de Kirchner se centró en la multiplicación de subsidios en favor de la auto-organización de los pobres (emprendimientos productivos). Sin embargo, en la actualidad, no son pocos los microemprendimientos que se encuentran en graves problemas, tanto de tipo exógeno (las condiciones de comercialización de sus productos, la falta de apoyo técnico), como endógenos (la falta de capacidades técnicas), con lo cual muestran escasas posibilidades de mantenerse sin ayuda estatal.

Por otro lado, el reforzamiento de la política asistencial fue acompañado por el aumento de los dispositivos clientelares, los cuales aparecen potenciados en época de campaña electoral. Este retorno del clientelismo, en sus formas más descaradas y obscenas, se ha registrado en

varias provincias. Así, durante las elecciones legislativas de 2005, en nombre de la "nueva política", el presidente y su esposa, llevaron a cabo la ruptura oficial con el sector del peronismo comandado por E. Duhalde, considerado como "la vieja política", desatando una verdadera guerra interna, que conmovió el llamado "aparato peronista" en la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, el Conurbano Bonaerense, símbolo de todos los males del país, fue testigo tanto de la cooptación masiva de intendentes, identificados con los sectores más rancios del peronismo, así como de una intensa batalla clientelar, en especial durante las últimas semanas de campaña electoral, cuando se registraron entregas masivas de electrodomésticos y de subsidios en hogares pobres.

Asimismo, la apropiación del discurso crítico por parte de N. Kirchner interpeló fuertemente al conjunto del espacio militante que venía luchando contra las políticas neoliberales. Una de las notas más saltantes de los últimos tiempos es la institucionalización de diferentes organizaciones sociales y la incorporación al gobierno de numerosos dirigentes provenientes de asociaciones de derechos humanos, organizaciones piqueteras, campesinas y fábricas recuperadas, la mayoría vinculadas a la tradición nacional-popular. El proceso de integración ha sido acompañado por la invisibilización y estigmatización de un conjunto de organizaciones antisistémicas o críticas del gobierno actual. En efecto, tras un discurso que afirmaba una y otra vez que el gobierno "no reprimiría", la política gubernamental se orientó hacia la estigmatización mediática, política y social de los piqueteros, al tiempo que impulsó la judicialización de las organizaciones movilizadas. Esta campaña, realizada entre 2003 y 2005 con el apoyo de los grandes medios de comunicación y los sectores tradicionales de poder, desembocó en un fuerte consenso antipiquetero. La disminución de movilizaciones de desocupados, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y la fragmentación del espacio militante están ligadas a este fenómeno.

En fin, esta confrontación desigual se ha venido produciendo, como ya hemos dicho, en un marco de crecimiento de la economía argentina (entre el 8 y 9% anual), que tiene como contrapartida un aumento notorio de la precariedad, al tiempo que no ha sido acompañado por una activa política de redistribución de la riqueza. En la actualidad, según datos del

Indec, el trabajo no registrado alcanza el 44,3%, mientras que el costo laboral ha descendido un 30% respecto de 2001.⁴ Asimismo, este proceso ha venido impulsando la expansión de trabajo esclavo en el rubro textil, que emplea mano de obra proveniente de países limítrofes, en especial, de Bolivia. En marzo de 2006, un incendio ocurrido en un barrio porteño que terminó con la vida de 6 inmigrantes bolivianos (la mayoría menores), fue el disparador de la denuncia de este tipo de talleres clandestinos, que emplean aproximadamente 4.000 ciudadanos bolivianos en la ciudad de Buenos Aires.⁵

Cierto es que, al igual que en otros países (Uruguay), luego de 11 años sin ser convocado, el gobierno nacional llamó a la Comisión de Salario Mínimo. En esta línea, otorgó aumentos de jubilaciones y pensiones y estableció un techo del 19% para el aumento salarial. Por su parte, desde el Congreso Nacional diputados oficialistas se propusieron introducir ciertas modificaciones a la legislación laboral en beneficio del trabajador, entre ellas, la eliminación del tope de indemnización por despido y la ley que posibilita a un empleado accionar ante la Justicia cuando sus condiciones de trabajo sean modificadas de manera unilateral por parte del empleador. Sin embargo, el tratamiento de estas medidas en el Parlamento se halla suspendido, frente a la denodada resistencia del sector empresarial, habituado a las grandes asimetrías.

Como era de esperar, la consolidación del liderazgo de Kirchner contribuyó al realineamiento del espacio sindical peronista, dividido entre el corporatismo político y el sindicalismo empresarial, ambos fuertemente burocratizados. En la actualidad, la desprestigiada CGT se halla reunificada bajo la conducción de H. Moyano, del sindicato de camioneros, cuyo poderío ha crecido exponencialmente en los últimos años, al compás del auge de los servicios. Pese a que este sector fue cuestionado recientemente, a raíz de los graves enfrentamientos intrasindicales ocurridos en octubre de este año,

⁴ Según el asesor laboral de la CGT y diputado oficialista, Héctor Recalde, *Página 12*, 2 de julio de 2006.

⁵ Las investigaciones posteriores apenas si alcanzaron a mostrar la oscura trama, hecha de arreglos y complicidades gubernamentales, que anudan la ruta del trabajo clandestino entre Bolivia y Argentina. En fin, estos hechos estuvieron en el origen de tres marchas de trabajadores bolivianos e incluso de la visita de una comisión del gobierno boliviano. Recordemos que la presencia boliviana en Argentina es muy importante y alcanza, según estimaciones, a los 2 millones.

durante el traslado definitivo del cuerpo de J.D.Perón, el presidente apoyó abiertamente su continuidad. Pero ahí donde el liderazgo del propio Kirchner golpeó más fuerte es en relación a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), nacida en el '94 y reconocida por su carácter crítico y antineoliberal. En efecto, la CTA, que nuclea básicamente trabajadores del Estado, atraviesa un período de gran ambigüedad, acosada por las diferencias internas, que incluye varios dirigentes que simpatizan con la política oficial, entre ellos el nuevo secretario general, procedente del gremio docente.

En el marco de crecimiento de la economía y a partir de 2004, los conflictos sindicales volvieron a la orden del día. Así, en 2005, los conflictos laborales se triplicaron respecto del año anterior (hubo 819 conflictos sindicales, mientras que en 2004 se registraron 249 casos). Aunque la mayoría de éstos han sido en demanda de una recomposición salarial, no son pocos los apuntan contra las consecuencias de la precariedad, buscando reducir las disparidades salariales entre los trabajadores de un mismo sector, fomentadas por el tercerismo y la política de flexibilidad salarial impuesta en los '90. Cabe agregar que, según una encuesta reciente del Ministerio de Trabajo, en la actualidad solo el 12% de las empresas cuenta con delegados gremiales. Los conflictos más resonantes fueron liderados por comisiones internas, en ciertos casos, por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas, entre los cuales se destacan los que se produjeron en el sector telefónico (empresas de call-center), transporte (subterráneos) y salud pública (hospitales). Todo ello llevó a que, en diciembre de 2005, se conformara un nuevo espacio de coordinación sindical, el Movimiento Intersindical Clasista, el cual reúne aquella izquierda basista con una clara afinidad con las organizaciones piqueteras independientes.

En otro orden, hay que recordar que en Argentina existe un importante movimiento de fábricas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores, que involucran unas 12 mil personas. Salvo en casos excepcionales, el Estado facilitó la formación de cooperativas, así como la expropiación y cesión temporaria (2 años) en favor de los trabajadores. En la actualidad, las fábricas recuperadas se hallan en una etapa de franca institucionalización (de las cuatro corrientes existentes, dos de las más

importantes poseen aceitados vínculos con el gobierno actual y sus principales dirigentes se definen como oficialistas), aún si sus obstáculos mayores remiten tanto a la falta de una ley de expropiación definitiva, como al escaso apoyo del Estado en el proceso de comercialización de los productos.

En suma, la política social y laboral presentan claras limitaciones. Por un lado, respecto del mundo de los excluidos, es notoria la ausencia de programas verdaderamente inclusivos, en el marco de la multiplicación de políticas sociales focalizadas. Por otro lado, respecto de la dinámica de la precariedad, se destaca la debilidad y las oscilaciones de las políticas laborales, así como la ausencia de estrategias redistributivas, en el marco de la consolidación de las grandes asimetrías económicas-sociales.

Política, empresas privatizadas y protestas ambientales

Algunos podrían argüir que el discurso crítico de Kirchner ha tenido ciertos blancos privilegiados, entre ellos, las empresas privatizadas. Ciertos casos resonantes, como el de la salida intempestiva de Suez, la compañía francesa, acompañada por una sobreactuación discursiva de Kirchner, parecerían avalar lo dicho. En realidad, lo más prudente sería relativizar esta afirmación. Para ello, vale la pena recordar las formas que adoptó el proceso de privatizaciones realizadas a inicios de los '90, el cual conllevó no sólo la destrucción de las capacidades estatales, sino también la conformación de mercados monopólicos, con una alta rentabilidad, favorecidos por la protección del Estado. Sin embargo, la salida de la convertibilidad y la posterior devaluación repercutió doblemente en las empresas privatizadas, a través de la disminución de la valorización de sus activos y el virtual congelamiento de las tarifas de los servicios.

En este punto, es necesario subrayar dos cuestiones. Por un lado, durante estos tres años, la política gubernamental se ha orientado a subsidiar económicamente a las empresas privatizadas, a fin de impedir un incremento importante de las tarifas que pueda repercutir negativamente sobre una sociedad tan proclive a la impugnación a través de la acción directa. Por otro lado, este mismo gobierno ha afrontado conflictos puntuales con las empresas privatizadas, frente al incumplimiento de los

contratos por parte de las mismas. En algunos casos, esto desembocó en la ruptura de contratos y su posterior paso a manos del Estado, como sucedió respecto del servicio de aguas y cloacas, en manos del grupo Suez-; del servicio postal -Correo Argentino-, del ferrocarril San Martín, y del espacio radioeléctrico. En este sentido, tanto el congelamiento de tarifas como la rescisión de ciertas concesiones, tanto en el nivel provincial como nacional-, explican porque la Argentina, con 34 causas en su haber, es uno de los países con más causas abiertas en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Respecto de la política del control y explotación de los recursos naturales y la protección del medioambiente (minería, gas y petróleo), imperan los dobles discursos. Más allá de ciertos gestos simbólicos (como ha sido, por ejemplo la creación de Enarsa -Energía Argentina Sociedad Anónima- y su asociación con la empresa petrolera venezolana -PDVSA-) el gobierno se ha cuidado muy bien en no desarrollar una prédica nacionalista, ni en reactivar la antinomia "estatal/privado", pese al reclamo de distintas organizaciones sociales (que incluye una parte del arco oficialista) sobre la necesidad de un cambio del marco regulatorio. Más aún, en octubre de 2006, el gobierno convirtió en ley una polémica norma que establece beneficios fiscales para las petroleras que inviertan en nuevos yacimientos de gas y petróleo.

En realidad, la nueva etapa parece señalar que, gracias a la existencia de un marco regulatorio extremadamente favorable, forjado en los 90 y continuado en la actualidad, los agentes del capitalismo global encontraron la puerta nuevamente demasiado abierta, para concretar la expansión por las llamadas áreas marginales, en las cuales se encuentran importantes reservas energéticas y mineras. En esta línea, uno de los hechos mas notorios del período es la expansión de las fronteras mineras, llevada a cabo por empresas trasnacionales. Pese a su escasa visibilidad mediática, desde 2001, los efectos contaminantes que dichos emprendimientos están generando (o amenazan con producir), han estado en el origen de diferentes movilizaciones multisectoriales en defensa del habitat en el interior del país.

En este sentido, el único reclamo ligado a la defensa del medio ambiente que el gobierno nacional apoyó durante un tiempo fue el de los vecinos de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, movilizados en contra de la instalación de empresas papeleras (las "pasteras") concedidas por el gobierno uruguayo. Dichas protestas, que han incluido largos cortes de los pasos fronterizos, entre 2005 y 2006, llegaron a tensar las relaciones entre los gobiernos de Kirchner y de Tabaré Vázquez. En los últimos tiempos, y a la espera de la resolución de la querrela, hoy en manos del Tribunal Internacional de la Haya, el gobierno de Kirchner le ha quitado el apoyo a la asamblea, que ha decidido continuar con los cortes en el puente que une a los dos países, luego de que el Banco Mundial decidiera desbloquear los créditos en favor de una de las papeleras.

En resumen: un primer balance de la política de Kirchner acerca de estas problemáticas, debe contemplar varios aspectos. Respecto de las empresas privatizadas así como de la política de explotación de los recursos naturales, el gobierno actual está lejos de haber propuesto una estrategia de reestatizaciones, que se orienten hacia un cambio del marco regulatorio. Lo que sucede es más simple, y tiene que ver con que el gobierno de Kirchner ha asumido una cierta firmeza y, por sobre todo, un tono virulento que linda con la sobreactuación política, inimaginable en la década pasada. Asimismo, parte de estas cuestiones constituyen todavía una asignatura pendiente (por ejemplo, el de las tarifas de los servicios privatizados), de cuya resolución depende sin duda la legitimidad futura del gobierno.

Las fronteras de la política institucional

Como en otros países de América Latina, las reformas neoliberales se tradujeron por una mayor concentración de poder en el líder o jefe presidencial. En Argentina, este giro decisionista fue facilitado por la convergencia entre una tradición hiperpresidencialista y una visión populista del liderazgo. De esta manera, el decisionismo se constituyó en la clave de bóveda del nuevo modelo de dominación, visible en la tendencia a gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia, así como a disciplinar y/o cooptar las voces disidentes, mediante un estilo de liderazgo peronista

caracterizado por la subordinación de los actores sociales y políticos al líder. En fin, esta situación fue promovida por la misma tendencia del propio Partido Justicialista a devenir, tal como afirma J.C.Torre, "un sistema político en sí mismo", convirtiéndose al mismo tiempo en oficialismo y oposición.⁶

En esta línea, la política de Kirchner postula una fuerte continuidad respecto de sus predecesores, al tiempo que instala ciertas rupturas. En efecto, en primer lugar, Kirchner tendió a fortalecer aun más el lugar de la soberanía presidencial. Sin embargo, a diferencia de Menem (o de De la Rúa), el espacio de la soberanía presidencial, fue utilizado –al menos en un primer momento– con el propósito de redefinir y otorgar mayor variabilidad a la relación entre economía y política, en un contexto de semi-default de la economía argentina. Como hemos dicho, Kirchner se vio favorecido por una situación de crisis económico-financiera, lo cual le otorgó mayores márgenes de acción, que hábilmente supo capitalizar. Por ello mismo, sus primeros gestos también fueron leídos como una suerte de "recuperación de la política", en comparación con la subordinación dramática de la política a los mandatos de los organismos multilaterales, así como al alineamiento automático con las orientaciones de Estados Unidos durante los '90.

Este giro fue acompañado por otras medidas, que tuvieron un gran impacto en la opinión pública, entre ellas, el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento de magistrados reconocidos por su idoneidad profesional e integridad política.⁷ Sin embargo, esta política sufrió un primer embate, a fines de 2005, con la aprobación de la ley que autoriza la reducción de los miembros del Consejo de Magistratura. Aclaremos que el mismo es un organismo multisectorial introducido por la reforma constitucional de 1994, cuya actividad más importante es la selección,

⁶ J.C. Torre, (1999), "Los desafíos de la oposición en un gobierno peronista", en Juan Carlos Torre et al., *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado*, Buenos Aires, Norma.

⁷ Este cambio, lejos de tener solo un alcance simbólico, tiende traducirse en una política de ampliación de los derechos. Dos fallos de la Corte, en 2006, así lo indican: por un lado, el máximo tribunal ordenó al gobierno actualizar los haberes de los jubilados, congelados desde la época del menemismo. Por otro lado, ante la denuncia efectuada por 140 vecinos y damnificados intimó al Estado a resolver la contaminación del Riachuelo y fijó una audiencia pública con 40 empresas, que se calcula no cumplen con los requisitos ambientales que marca la ley. En virtud de ello, el gobierno se comprometió lanzar un Plan integral de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la cual involucra nada menos que a 4 millones de habitantes.

sanción y remoción de jueces. Con la excusa de reducir el número de consejeros, la reforma introducida por el gobierno de Kirchner aumentó la representación política —eliminando la participación de las minorías— y limitó la participación de jueces, académicos y abogados. Por otro lado, la tendencia a la normalización del “Estado de excepción”, se ha prolongado a través de la firma de decretos de necesidad y urgencia, y la aprobación de la llamada ley de “superpoderes”, solicitada por el gobierno, que apunta al fortalecimiento de la autoridad del jefe de gabinete, quien tiene la potestad para reasignar partidas presupuestarias, sin control del Parlamento.

Como ya hemos señalado, la reivindicación de una “nueva política” y la apropiación del discurso crítico coexisten desvergonzadamente con la potenciación de los dispositivos clientelares y la perpetuación de funcionarios y gobernadores, vinculados a la década del ‘90. Este doble discurso encontró empero un límite en las últimas elecciones realizadas en la provincia de Misiones, en donde el actual gobernador —en nombre de la “nueva política”— pretendía reformar la Constitución provincial para habilitar la reelección indefinida. Es sabido que el presidente Kirchner no sólo apoyó dichas aspiraciones, sino que, sobreactuando una vez más las oposiciones, “nacionalizó” la elección (de congresales constituyentes), lanzando crudos anatemas al frente opositor, que se había congregado en torno a Joaquín Piña, un obispo de intachable perfil progresista. Pero, pese la escandalosa multiplicación de las acciones clientelares (o precisamente por ello), las urnas dieron como vencedor contundente a los candidatos de la oposición. El efecto “Misiones” golpeó fuertemente al gobierno, al tiempo que ilusionó a una oposición disgregada y debilitada ante la realidad del peronismo infinito, de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2007. Sin embargo, el presidente Kirchner volvió a recuperar la iniciativa política, obligando a los gobernadores que aspiraban a la reelección, a que desistieran de sus pretensiones

En fin, pareciera que la capacidad de absorción y neutralización del partido en el poder, tanto respecto de las formas institucionales como no institucionales de la política, siguen siendo muy altas. Esto aparece ilustrado por la cantidad de organizaciones, anteriormente movilizadas, que se han incorporado al gobierno. No hay que olvidar, empero, que la Argentina es

un país en el cual emergen permanentemente nuevos reclamos, los cuales asumen indefectiblemente la acción directa y la organización asamblearia como forma de expresión, desbordando así los frágiles canales institucionales, a lo cual hay que sumar la persistencia de un arco de organizaciones sociales antisistémicas, críticas del gobierno actual, bien insertas en redes nacionales y globales.

Por último, cabe recordar que estas luchas y procesos se desarrollan en un espacio latinoamericano atravesado por la crítica al neoliberalismo y por la búsqueda de alianzas regionales. Este nuevo escenario, reforzado por la última cumbre del MERCOSUR realizada en Córdoba (julio 2006), y que incluyó el ingreso de Venezuela, divide el campo militante, produciendo no pocas tensiones y contradicciones. En este contexto, la cuestión acerca del alcance político del gobierno de Kirchner deviene central, si pensamos que casi todas las organizaciones y movimientos sociales consideran que los desafíos por venir se jugarán en este nuevo espacio, en el caso de que el MERCOSUR adoptara una dimensión más político-económica.

Así, aunque todavía sea muy temprano para realizar balances definitivos, lo cierto es que en medio de un discurso (im)posibilista, los avances de las organizaciones sociales integradas en el campo del gobierno han sido muy magros y en no pocos casos su rol apunta a la legitimación de un modelo asistencial-participativo, lo cual consolida la inclusión de los excluidos como excluidos, en el marco de la naturalización de las desigualdades. Los avances se observan sobre todo en el campo de la "política de la memoria" y en la reactivación de los juicios a los militares, responsables de delito de lesa humanidad. Sin embargo, esta política sufrió un rudo golpe con la desaparición de Julio López, en septiembre de 2006, un exdetenido-desaparecido que fuera testigo esencial en el juicio que condenó a prisión perpetua a un conocido excomisario de la dictadura. Su desaparición vuelve a poner al descubierto la relación de continuidad entre el aparato represivo dictatorial y las actuales fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, la imposibilidad de dar con su paradero o con alguna pista sobre su desaparición, plantea interrogantes por demás perturbadores acerca de cual es el alcance de la voluntad política del gobierno, así como de la viabilidad de los próximos juicios a los militares, responsables de la violación de derechos humanos.

En fin, más allá de que una parte del nuevo mundo organizacional fue integrado a la esfera gubernamental, lo que sigue ausente de la agenda es el desafío de pensar la vinculación entre la democracia representativa y las nuevas formas de democracia directa y participativa, por fuera de los moldes del régimen de dominación, instituido en los '90.

* * *

El gobierno de Kirchner presenta tres fronteras mayores, que van anunciando los límites de su gestión. En primer lugar, está la frontera de la exclusión, claramente delimitada, frente a la ausencia de programas verdaderamente inclusivos respecto del amplio mundo de los excluidos, en un contexto de naturalización de las desigualdades sociales. En segundo lugar, está la frontera de la precariedad, que da cuenta de la debilidad y las oscilaciones de las políticas laborales y las estrategias redistributivas en su combate contra la dinámica flexibilizadora y las grandes asimetrías económicas-sociales. En tercer lugar, están las fronteras de la política institucional marcadas, hacia adentro, por la consolidación del modelo decisionista y la democracia delegativa; hacia afuera, con relación a la política no-institucional, por la absorción y pérdida de autonomía de las organizaciones sociales oficialistas o, en su defecto, por la exterioridad estigmatizante de las organizaciones opositoras.

Así, sin continuidades lineales, y pese que el escenario político presenta importantes modificaciones respecto del pasado reciente, tanto en lo que se refiere a la proliferación de nuevas prácticas de resistencia como a la circulación de discursos políticos críticos, el modelo neoliberal –y el régimen político que acompañó su instalación– siguen gozando de buena salud. En fin, ambigüedades, tensiones y dobles discursos constituyen entonces el hilo articulador de la política del gobierno de Kirchner, en un escenario en el cual se entrecruzan y yuxtaponen la consolidación de lo viejo con las aspiraciones de lo nuevo...